

BALANCE COMPARATIVO DE LAS LUCHAS CONTRA LA LÍNEA DE MUY ALTA TENSIÓN ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA A UNO Y OTRO LADO DE LA FRONTERA*

AURÉLIEN COHEN

UNIVERSITÉ DE PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE

LAURENCE RAINEAU

UNIVERSITÉ DE PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE

JOAQUIM SEMPERE

UNIVERSITAT DE BARCELONA

La comparación de las experiencias de movilización contra la línea de Muy Alta Tensión a uno y otro lado de la frontera franco-española revela diferencias y semejanzas. Ante todo, Francia, país cuyo parque de reactores nucleares por número de habitantes es el mayor del mundo, aspira desde hace años a exportar electricidad. Además, con la liberalización del mercado de la energía en la UE, se impone a nivel continental el imperativo de interconexión eléctrica entre todos los países miembros, excluyendo que se pueda poner en discusión dicha interconexión. Ambos gobiernos, francés y español, se sienten vinculados por este imperativo y rechazan cualquier salida incompatible con él.¹ En este contexto, los movimientos de oposición en ambos países se ven obligados a una batalla defensiva, pese a sus esfuerzos para pasar de una estrategia reactiva a otra propositiva o proactiva.

ORDENAMIENTOS LEGALES EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MARCOS ASOCIATIVOS

Veamos primero cuáles son las diferencias más marcadas entre los dos casos.

Una primera diferencia importante deriva de los distintos ordenamientos legales en materia de participación ciudadana. En Francia se aplica el principio preceptivo de consulta previa a los representantes políticos locales (alcaldes, representantes regionales, diputados de la Asamblea Nacional...) y a las entidades asociativas. Fue justamente la iniciativa gubernamental de proceder a la consulta lo que alertó a la población y desencadenó el conflicto, aunque la movilización precedió al proceso de concertación y fue clave para el resultado final. En cambio, en España no hay consulta previa instituida (pese a que España ha firmado el convenio de Aarhus): la Administración aprueba el proyecto y lo somete a información pública. Las entidades y ciudadanos tienen 30 días para presentar alegaciones, tras lo cual el gobierno decide. De hecho, la movilización en España comienza en 2004, cuatro años más tarde que en Francia, a partir de un encuentro de alcaldes de ambos lados de la frontera durante el cual los alcaldes españoles tienen por primera vez conocimiento del proyecto. Mientras que los cargos electos y las organizaciones sociales franceses saben que su gobierno nacional está obligado al diálogo y

* Los autores de los dos artículos precedentes han elaborado esta nota adicional que especifica la relación entre ambos.

¹ No hay que olvidar tampoco que el macroyecto Desertec de «anillo eléctrico mediterráneo» (por el que el gobierno de Sarkozy parece apostar fuertemente) incluye también la interconexión internacional con líneas MAT, de las que la línea prevista en Cataluña formaría parte.

la concertación con ellos, los españoles saben que para que se les escuche deben imponer su voz en la calle, fuera del marco institucional.

Otra diferencia deriva de los marcos asociativos en uno y otro país. En Francia el colectivo Non à la THT reúne a unas 250 asociaciones y goza de reconocimiento legal, que lo convierte en interlocutor institucional con el gobierno del Estado. En España, en cambio, la Plataforma No a la MAT agrupa a personas como tales: aunque pertenezcan a asociaciones o colectivos, en la plataforma militan individualmente. Además, la plataforma decide no inscribirse en el registro oficial de asociaciones, de modo que no tiene existencia legal. Esta circunstancia le dificulta ser reconocida como interlocutor válido por las Administraciones públicas y las empresas implicadas. En lo que atañe a los municipios, la forma asociativa adoptada es la misma; pero una debilidad de AMMAT en comparación con Sydeco-THT66 (al que se adhieren todos los municipios de la zona) consiste en que no participan en ella los municipios más importantes de la zona afectada: Girona, Figueres y Banyoles.

En Francia la lucha obtiene una victoria parcial: se consigue el soterramiento completo de la línea, en beneficio del paisaje y la salud, pero no el debate de fondo sobre el modelo eléctrico. En España la derrota es completa: no se consigue el soterramiento reivindicado ni abrir el debate sobre el modelo eléctrico. El sentimiento de derrota se asocia con el de haber sido ignorados, menospreciados y marginados, y de no haber tenido ninguna oportunidad para hacer valer el derecho a una participación real en la toma de decisiones.

PAPEL DEL SABER EXPERTO Y DE LOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

Una tercera diferencia consiste en la mayor disposición de las autoridades francesas a aceptar el diálogo sobre cuestiones tecnocientíficas, en particular la de los riesgos de los campos electromagnéticos en la salud. En España la patronal y la Administración autonómica catalana se niegan a entrar en polémica, invocando incluso a la OMS para sostener que la polémica está zanjada a nivel

internacional, pese a que la plataforma dispone de los mismos informes de quienes asesoran al colectivo francés, y además cuenta entre sus miembros con un radiofísico que puede invocar estudios publicados en revistas especializadas, en algunos de los cuales ha participado él mismo.

DE LA DEFENSA DE INTERESES LOCALES A LA ASUNCIÓN DE OBJETIVOS GENERALES

A la vez, el examen de las dinámicas de ambas experiencias arroja numerosas coincidencias.

Ambas movilizaciones comienzan con la defensa del paisaje y el patrimonio cultural frente al impacto visual de las torres. Esta defensa es también defensa de intereses económicos: el impacto visual reduce el atractivo de instalaciones de turismo rural y el valor patrimonial de las fincas afectadas. A esta primera motivación se añade pronto la preocupación por los posibles daños a la salud de los campos electromagnéticos generados por la corriente alterna a muy alta tensión. Se trata, pues, en ambos casos de un conflicto debido a intereses de los afectados, intereses que tienen que ver con la sensibilidad y las emociones y, a la vez, con perjuicios para la salud y económicos.

También coinciden en que, desde el comienzo, buscan comprender qué está en juego y acuden a especialistas científicos y técnicos. La interacción con estos especialistas no sólo les permiten aprender y comprender lo que se dirime, sino también considerar si hay alternativas para resolver los problemas de suministro eléctrico que los Estados declaran tener planteados. En ambos casos la intervención de los científicos y técnicos es fundamental para dar fuerza a las reivindicaciones de los movimientos ante las autoridades, pero también ante la opinión pública.

¿SON NEUTRALES Y OBJETIVOS LOS ESPECIALISTAS TECNOCIENTÍFICOS?

En ambos casos los técnicos son vistos como personas sujetas a los intereses de quienes les contratan o solicitan, y esto desemboca en una desconfianza generalizada. Cada bando ve a sus propios

expertos como «más objetivos» que los del bando contrario.

Los técnicos, por su parte, expresan escepticismo sobre lo que dicen los del bando contrario, con el resultado de un clima de crispación y de falta de contrastación serena de las ideas. El balance de ambas experiencias en este punto contradice el estereotipo de una ciencia «neutral» capaz de arbitrar entre intereses opuestos. Claro que no es lo mismo el saber científico abstracto que sus aplicaciones técnicas o productivas —en las que intervienen no sólo conocimientos, sino también decisiones que se toman en función de intereses, aspiraciones y valores—, pero el problema queda planteado. Se trata también de un problema *moral* del especialista y un problema *político* de la sociedad: ¿no deberían establecerse reglas sobre el uso social del saber científico-técnico?

UN DEBATE FRUSTRADO: ¿QUÉ MODELO DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD?

Finalmente ambas experiencias se viven como ocasiones desperdiciadas para poner en cuestión el entero modelo de producción y distribución de electricidad, aunque en los dos casos este debate interesa sólo a una minoría de activistas. El debate sobre el modelo eléctrico no tiene lugar ni en Francia ni en España. Ahora bien, las circunstancias difieren de un país a otro. En Francia RTE acaba aceptando el soterramiento de la línea, aunque el coste económico aumente muchísimo.² Se puede interpretar que RTE acepta porque ya ha tenido que soportar un retraso muy grande y prefiere pagar más para disponer de la línea sin más dilaciones. En el momento en que RTE acepta soterrar la línea desde la frontera del Pertús hasta Baixàs (Pirineos-Orientales), la lucha en Francia cesa. De haber proseguido con el objetivo más ambicioso de abrir el debate público, la unidad y el carácter masivo de la movilización se habrían quebrado. Los activistas más concienciados viven este cese del combate como una renuncia y una frustración. En el lado español, la derrota es doble: ni se consigue el so-

terramiento reclamado por los ayuntamientos, ni abrir ningún debate de fondo.

EL DIVORCIO ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y PODER

Otro punto de coincidencia a ambos lados de la frontera es la experiencia de alienación entre población y poder económico-político, que por parte de los activistas se traduce en la acusación de mala fe. La plataforma del lado español tiene motivos visibles para atribuir *mala fe* al poder económico y político. La del lado francés atribuye también mala fe a sus interlocutores, pero no porque se negaran a dialogar, sino por otras varias razones, y en particular por un uso tendencioso del saber por parte de sus asesores técnicos para tratar de imponer la línea aérea. Esta coincidencia en atribuir mala fe al adversario parece sugerir la dificultad de una gobernanza real y eficaz. La oposición de intereses, objetivos y mentalidades parece condenar el diálogo y la concertación entre sociedad civil y poder económico-político a la desconfianza, y por tanto a la dificultad para colaborar.

DISFUNCIONES EN LOS TIPOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EXAMINADOS

La comparación de ambos casos subraya el valor que tienen las disposiciones legales que institucionalizan la obligación de los Estados de asociar la sociedad civil a las tomas de decisión. Subraya también la importancia de tener una sociedad civil activa y organizada. A la vez, plantea las disfunciones de una gobernanza que no tenga en cuenta la escala ni el nivel: una población local no puede dialogar con autoridades supralocales (como las nacionales) y ejercer una soberanía compartida con ellas si no cuenta con estructuras de la sociedad civil capaces de abordar los problemas planteados desde un punto de vista general. Sin la coordinación de tales estructuras, difícilmente un movimiento local podrá superar el carácter reactivo de su lucha y ejercer una función proactiva para dar respuestas a problemas que son a la vez locales y globales.

² Sobre el aumento del coste hay grandes diferencias entre los cálculos de unos y otros, tanto en Francia como en España.

